TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE
CUNDINAMARCA
Sala Civil – Familia

Magistrado Sustanciador:
Germán Octavio Rodríguez Velásquez

Bogotá, D.C., tres (3) de mayo de dos mil veintitrés (2023).

Ref: Sucesión de Jorge Ernesto Jaramillo Murillo. Exp. 25269-31-84-001-2019-00118-02.

Decídese el recurso de apelación interpuesto por Leonardo Rodríguez González y la heredera Diana Jaramillo Gómez contra el auto de 24 de octubre del año anterior proferido por el juzgado primero promiscuo de familia de Facatativá, teniendo en cuenta los siguientes,

I.- Antecedentes

Efectuada la facción de inventarios y avalúos dentro de la mortuoria de Jorge Ernesto Jaramillo Murillo, el 9 de mayo de 2022 pidió la heredera Diana Jaramillo Gómez aceptar la cesión de derechos herenciales que a título de venta y mediante escritura 604 de 5 de abril de esa anualidad hizo en favor de Leonardo Rodríguez González; el juzgado, por auto de 29 de julio siguiente la requirió para que, antes de proveer sobre la cesión, indicara si se había apropiado de algunos cánones de arrendamiento de uno de los bienes herenciales, atendiendo los señalamientos que venían haciendo otros interesados en ese propósito, requerimiento que atendió el 9 de agosto posterior, advirtiendo que no debe a la masa sucesoral nada distinto de lo que ya fue inventariado.

Mediante el proveído apelado, el a-quo tomó nota del embargo decretado por el juzgado civil municipal

de Facatativá sobre los derechos que dentro del proceso le puedan corresponder a la citada heredera, al paso que negó el reconocimiento de Leonardo Rodríguez González como cesionario, aduciendo que estando vigente el embargo, ya la aceptación de esa cesión no venía procedente; determinación que mantuvo al revisarla en reposición, a la par que concedió el recurso de apelación que en subsidio formularon la heredera y el pretense cesionario, lo que hizo en el efecto devolutivo y el cual, debidamente aparejado, se apresta la Corporación a resolver.

II.- El recurso de apelación

Lo despliegan sobre la idea de que la cesión de derechos herenciales está permitida por la ley con el fin de que el cesionario pase a ocupar jurídicamente el lugar que tenía el cedente o vendedor de los derechos, cual se hizo en este caso en que a través de la correspondiente escritura pública se realizó la cesión, momento en que se reputa perfecta la venta ante la ley, en los términos del artículo 1857 del código civil, no obstante que no fue aceptada oportunamente por el juzgado, que aplazó su pronunciamiento para realizar un requerimiento “*sin sentido*” que, en todo caso, se “*cumplió cabalmente*”; así, si el embargo decretado por el juzgado civil municipal de Facatativá le fue comunicado al juez el 2 de septiembre de 2022, esto es, más de cuatro meses después de haberse puesto en conocimiento el negocio celebrado entre cedente y cesionario, ha debido admitirse ésta y no tener en cuenta la citada medida cautelar.

Consideraciones

Ciertamente, el derecho de herencia por ser de “*índole patrimonial, como todos los demás derechos reales o crediticios reconocidos por la ley, y en tal carácter puede ser transmitido por causa de muerte, o transferido en todo o en parte y a cualquier título, por un acto entre vivos denominado en nuestro ordenamiento ‘la cesión del derecho de herencia’, así tipificado genéricamente por el artículo*

1867 del C. Civil” (Cas. Civ. Sent. de 30 de enero de 1970), mas precisamente por tratarse de un derecho “*real, absoluto, oponible erga omnes* y [que] *goza de los derechos de preferencia y de persecución*” (Cas. Civ. Sent. de 10 de agosto de 1981), su transmisión está sujeta a ciertas formalidades, cual al efecto lo dispone el precepto 1857 del estatuto civil, a cuyo tenor se tiene que la “*venta se reputa perfecta desde que las partes han convenido en la cosa y en el precio, salvo*” cuando se trate de la “*venta de los bienes raíces y servidumbres y la de una sucesión hereditaria*”, pues éstas “*no se reputan perfectas ante la ley, mientras no se ha otorgado escritura pública*”.

Aquí, dice la apelación si la venta de derechos hereditarios se reputa perfecta desde el momento en que se suscribió la correspondiente escritura pública y fue presentada en el proceso antes de conocerse la orden de embargo decretada contra la heredera, ha debido el juzgador estarse a ella y, por ende, rehusarse a tomar nota de la cautela decretada en la ejecución que se adelanta contra ésta; claro, los “*efectos de una cesión universal de derechos hereditarios comienzan entre cedente y cesionario desde el mismo perfeccionamiento de la cesión*” (Lafont Pianetta, Pedro; Proceso Sucesoral; Tomo II; Quinta Edición; Librería Ediciones del Profesional Ltda.; 2019; pág. 185 y 186); mas, una cosa es que esto sea así y otra que cuando ésta se hace después del reconocimiento judicial del antecesor, la cesión tiene un “*doble efecto*”; uno de índole “*sustancial*” y, otro, de tipo “*procesal*”, el cual produce “*importantes consecuencias como las siguientes: intervenir y excluir al antecesor, asumir la situación procesal de este, recibir el proceso en el estado en que se encuentre, adquirir las cuestiones atinentes a la parte antecesora (v.gr. secuestro, recursos, administración, etc.), admitir el saneamiento de nulidad hecho por la parte causahabiente, ser adquirente a título conmutativo (v.gr. cuando se fundara en el inventario y avalúo), exigir cuentas, pedir la entrega de bienes, hacer suyo retroactivamente lo que le ha correspondido a la partición*” (Lafont Pianetta, Pedro; Proceso Sucesoral; Tomo

I; Quinta Edición; Librería Ediciones del Profesional Ltda.; 2019; págs. 252 y 253).

Esto quiere decir, en una palabra, que solo con la aceptación de la cesión en el juicio sucesorio puede decirse que esos derechos salen del patrimonio del deudor heredero, disminuyendo, por consecuencia, su garantía de cobro en relación con sus acreedores personales, que no en un momento anterior, en la medida en que es “*cuando se haga el reconocimiento al cedente (en caso de cesión plena*” que aquél “*deja de ser parte en el proceso*” (*ibídem*, pág.278)

Cierto, si la escritura de cesión se aportó al proceso mucho antes de que el juzgado que tramita la ejecución contra la cedente comunicara la medida, no parece atemperado con los principios de celeridad y eficiencia que la decisión sobre la primera no se haya producido con la prontitud que la situación reclama. Lo primero ocurrió el 9 de mayo de 2022; y el oficio de la medida llegó el 2 de septiembre siguiente. Mas, aun cuando eso no luzca conteste con los mentados principios, no puede perderse de vista que si bien el expediente estuvo al despacho más tiempo del esperado, también jugó en ello el requerimiento que tuvo que hacerle el juzgado a la cedente en el citado auto de 9 de julio de ese año, exigiéndole que, antes de decidir sobre la cesión, se pronunciara sobre los señalamientos que otros interesados en la mortuoria le hacían por haberse apropiado de los frutos de un inmueble del acervo herencial, determinación cuya juridicidad no puede entrar a cuestionarse en este momento, menos si frente a ella no hubo discrepancias por parte de la heredera requerida, quien tan conforme estuvo con él, que el 9 de agosto brindó la explicación pedida.

La cuestión, con prescindencia de lo acorde y proporcionado que se aprecia el dicho requerimiento, que ciertamente se antoja plausible si se tiene en cuenta esa pendencia que otros interesados autorizaban hacerlo [sobre todo si en los inventarios y avalúos había quedado que la citada heredera es deudora de algunas especies pertenecientes al haber sucesoral] y, además, lo dispuesto

por el artículo 1968 del código civil, que establece que si “*el heredero se hubiere aprovechado de los frutos o percibido créditos, o vendido efectos hereditarios, será obligado a reembolsar su valor al cesionario*”, es que ese malestar de la censura por la tardanza en el pronunciamiento sobre la cesión, no basta para soslayar el hecho incontestable de que cuando se recibió por el juzgado la comunicación del embargo, la cesión no se había aceptado.

O sea, siendo las cosas así, es evidente que la única opción que tenía el juzgador a-quo era la de tomar nota de la cautela y, por contrapartida, rehusar la aceptación de la cesión de esos derechos hereditarios embargados, pues si a voces del numeral 5° del artículo 593 del código general del proceso, el embargo de “*derechos o créditos que la persona contra quien se decreta el embargo persiga o tenga en otro proceso se comunicará al juez que conozca de él para los fines consiguientes, y se considerará perfeccionado desde la fecha de recibo de la comunicación en el respectivo despacho judicial*” (subraya la Sala), lo que debe comprenderse es que a partir de ese momento no podía el juez “*aceptar o autorizar ninguna transferencia del derecho embargado*”, de ahí la importancia de que “*el embargo se comunique al juez de conocimiento de la sucesión, para que se abstenga de hacer nuevos reconocimientos*” (ob, cit. Tomo II, pág. 189).

A la verdad, si con la cesión de derechos herenciales, el “*cedente conserva su intransmisible calidad de heredero que es por la que responde o no, según que el acto sea oneroso o gratuito respectivamente, pero dicho cedente queda despojado por virtud de la cesión de todo o parte de su derecho patrimonial, el real de herencia que pasa al cesionario con las facultades y prerrogativas inherentes*” (Cas. Civ. Sent. de 30 de enero de 1970, G.J. t. CXXXIII, pág. 38, reiterada en fallo de 26 de febrero de 2016, exp. SC2379-2016), eso mismo está diciendo que la única alternativa por la que podía inclinarse el juzgador era por la de mostrarse atento y respetuoso del derecho de los acreedores de esa heredera de perseguir esos derechos que

conforman su prenda general, pues por algo dispone el precepto 2488 del código civil, que “[t]oda obligación personal da al acreedor el derecho de perseguir su ejecución sobre todos los bienes raíces o muebles del deudor, sean presente o futuros, exceptuándose solamente los no embargables designados en el artículo 1677”, todo lo más en un caso como el de ahora, en que si de analizar la anterioridad del derecho se tratara, lo que habría de colegirse es que la acreencia y el inicio del proceso ejecutivo son previos a la cesión, de tal manera que si debiera dársele prevalencia a una de las dos, sería a la efectividad de las cautelas y no a la disposición de ese derecho que representa una debilitación de esa acción de cobro.

Secuela de lo expuesto el auto apelado debe confirmarse, con la condigna imposición en costas como lo dispone el numeral 3º del artículo 365 del código general del proceso.

III. – Decisión

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca, Sala Civil – Familia, confirma el auto de fecha y procedencia preanotados.

Costas del recurso a cargo de Leonardo Rodríguez González y de la heredera recurrente. Tásense por la secretaría del a-quo en el momento procesal oportuno, incluyendo como agencias en derecho la suma de \$350.000.

Oportunamente, vuelva el proceso al juzgado de origen para lo de su cargo.

Notifíquese y cúmplase,

Germán Octavio Rodríguez Velásquez

Firmado Por:
German Octavio Rodriguez Velasquez
Magistrado Tribunal O Consejo Seccional
Sala 004 Civil Familia
Tribunal Superior De Cundinamarca - Cundinamarca

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **e7a133a39d1c0a3aa10c23bab6bc3fae89825af1602dadca466e88b67b6fce7**

Documento generado en 03/05/2023 03:25:36 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>